

Políticas públicas en África Occidental: el caso de los polos de crecimiento agrícolas. Caracterización a través de tres estudios de caso.

Emma Gabrielle Lucie Tyrou

Resumen de la tesis de investigación en el marco del Master 2 Desarrollo Agrícola y Políticas Económicas (111 páginas). Filiación institucional: IEDES - París I Panthéon Sorbonne y CIRAD. Curso 2017-2018. Tesis defendida el 21 de septiembre de 2018 en el IEDES (45 bis rue de la Belle Gabrielle, Nogent sur Marne). Jurado compuesto por la Sra. Charlotte Guénard (IEDES), el Sr. Laurent Levard (GRET), el Sr. Vincent Ribier (CIRAD) y el Sr. Guillaume Soullier (CIRAD)

Marco, problemática y método de estudio

Este trabajo tiene la finalidad de arrojar luz sobre la dinámica de la acción pública en el sector agropecuario en los países de África Occidental. Tiene sus raíces en el contexto posterior a la crisis de los precios alimentarios de 2007-2008, en el que muchos países están aplicando políticas para aumentar la producción nacional de alimentos, en particular en el sector del arroz (Demont, 2013, Hathie, 2016). Dado que las limitaciones presupuestarias siguen siendo un factor determinante, se fomenta la participación del sector privado, en particular a través de la asociación público-privada (APP), una solución contractual que asocia al sector público y agentes privados en torno a la realización de un servicio público (Ribier y Baris, 2013). En este contexto, el enfoque del desarrollo agrícola y agroalimentario a través de los polos de crecimiento agrícola, o “agropolos” se presenta tanto a modo de respuesta a la necesidad de aumentar la producción agrícola como una estrategia para movilizar al sector privado para lograrlo.

Las agropoles pueden definirse como iniciativas de desarrollo territorial centradas en la agricultura con el objetivo de concentrar las actividades agro-industriales en zonas de alto potencial agrícola con el fin de aumentar la productividad (BAfD, 2018). Los bancos de

desarrollo como el Banco Mundial (BM) y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) están promoviendo esta estrategia de desarrollo agrícola, y se están llevando a cabo muchas iniciativas: al menos una docena de países habían formulado uno o más proyectos de políticas agrícolas en 2016 (BAfD, 2016).

Esta tendencia reciente se discute en la literatura especializada que consiste por una parte en publicaciones institucionales. Estas fuentes destacan el potencial del este modelo, o incluso lo presentan como una panacea (Ouattara, 2016). Por otra parte, estudios detallados documentan uno o más proyectos específicos, en particular su estructura financiera y técnica (por ejemplo, Dagor, et al., 2016; Chiapo, 2016; Venot et al., 2017; Soullier, 2017; Tapsoba, 2018). A veces tienen una visión muy crítica de sus impactos y ponen de relieve los riesgos tanto en términos de medio ambiente como en términos de seguridad alimentaria o soberanía entre actores privados y públicos. En el enfoque del polo de crecimiento agrícola, la principal misión de las políticas públicas es crear condiciones favorables para que la inversión privada apoye la industrialización del sector agrícola (Ouattara, 2016). Sin embargo, poco se sabe sobre las modalidades exactas de los incentivos proporcionados por las autoridades públicas (Webber & Gálvez Nogales, 2017: 292).

Por lo tanto, la problemática del estudio de los agropolos suscita cuestionamientos y polémicas. Sin embargo, a ambos extremos de este campo de la literatura académica, los vínculos entre los agropolos y las políticas públicas son muy poco explorados. De estos límites se deriva el problema de la tesis: ¿qué políticas públicas implementan los estados de África Occidental para el desarrollo de los agropolos?. Este estudio pretende recoger y sintetizar la información disponible, pero también aportar nuevos conocimientos sobre la ejecución de proyectos de agropolos. El trabajo de tesis se divide en tres capítulos. El primero especifica el propósito y la metodología del estudio, mientras que la

caracterización de la acción pública se lleva a cabo en el segundo capítulo, a través de los casos de tres países de África Occidental (Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal). El tercer y último capítulo permite analizar los resultados, por modalidades de acción y luego por actores a los que se dirigen las políticas públicas. A la luz de los resultados, se esboza un análisis crítico del modelo de desarrollo de los agropoles y se proponen líneas de trabajo para profundizar la investigación a futuro.

La hipótesis de investigación que se presenta a continuación estipula que las políticas públicas para el desarrollo agrícola a través del modelo de los agropolos se traducen principalmente en exoneraciones fiscales para los agronegocios. La hipótesis se basa en la literatura y sólo conjetura sobre una de las modalidades más documentadas a través de fuentes de distinta naturaleza (en particular Ouattara, 2016; Dagor et al., 2016; Picard et al., 2017). Esta elección del "mínimo común denominador" permitió abrir un amplio campo de comparación con otras herramientas y beneficiarios de la acción pública.

Para refutar o verificar la hipótesis de la investigación, la tesis pretende establecer una comparación a través de tres estudios de caso: Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal. Estos países han sido seleccionados por la disponibilidad de información y las diferentes fases del progreso de los proyectos de polos agrícolas (lanzados entre 2011 para Bagrèpôle en Bagré, 2013 para el Proyecto de Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Agroindustria PDIDAS en Senegal, y 2016 para el Polo Agro-Industrial de Bélier).

El análisis se realiza entonces desde tres ángulos. En primer lugar, sistematizando la caracterización de la acción pública a través del cuadro de análisis de Daviron et al.¹ Se

¹ Este marco analítico propone tres categorías de acción pública: transferencias (1.1 Transferencias fiscales; 1.2 Medidas de apoyo directo; 1.3 Medidas de estabilización), provisión de bienes y servicios (2.1 Provisión de bienes públicos; 2.2 Servicios y actividades de mediación: Promoción de la inversión productiva y el

trata entonces de evidenciar el paso de la intención a la ejecución de la acción pública. Si bien fue esencial analizar los documentos que conformaron el marco de las políticas, el objeto de este trabajo es su implementación. Finalmente, dado el papel central de estos actores en el desarrollo buscado, se documentan las trayectorias de los actores privados para cada uno de los polos estudiados (Bagrépôle, el valle del río Senegal y Bélier/Yamoussoukro).

En este último punto, los contactos con los investigadores en el campo fueron particularmente esclarecedores, para captar con mayor precisión las tendencias en la aplicación de las políticas. Las otras fuentes movilizadas son una revisión de la literatura (fuentes académicas, documentos de políticas públicas, instituciones y activistas), y cifras sobre el gasto público agrícola. El trabajo realizado pretende superar varios retos metodológicos: por un lado, descifrar los diferentes ángulos de enfoque y las posiciones tomadas por las distintas fuentes, en un debate altamente polarizado. Por otra parte, el acceso a datos precisos y unificados sobre el gasto público agrícola ha sido difícil. Se analizaron críticamente bases de datos de organizaciones internacionales para complementar las publicaciones nacionales disponibles en línea.

Presentación de los resultados

Una vez explicados estos elementos contextuales y metodológicos, los principales resultados de este estudio pueden, a efectos del presente resumen, exponerse en dos etapas. La primera adopta un enfoque dinámico, para caracterizar la acción pública en cada una de las cinco etapas sucesivas del modelo de polo de crecimiento agrícola. Este modelo se ha presentado en el primer capítulo de la tesis: se basa en la literatura de los clusters y pools

industriales, que se fundamentan en los efectos de aglomeración y el aumento de la competitividad. Según esta visión, promovida por las instituciones internacionales, los mecanismos de coordinación vertical, combinados con cambios de escala de las actividades y de tecnología, deberían dar lugar a economías de escala y a una mejora de la calidad de los productos, lo que a su vez llevaría a una mayor generación de valor añadido. Se espera que la producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios aumente con el tiempo. Hay cinco pasos para lograr este objetivo. El estudio comparativo realizado muestra que las políticas públicas se centran en una de esas etapas: la etapa de mejoramiento del contexto económico, previa al establecimiento de actividades agroindustriales.

En esta etapa, la palanca de la política pública movilizada de la manera más recurrente y amplia son las exoneraciones fiscales para los agronegocios. Los tres países han adaptado sus códigos de inversión para hacerlos más atractivos para el sector agroindustrial, centrándose en grandes inversiones y actividades de exportación. Las similitudes entre los casos son claras, incluso en términos de los actores destinatarios. Estas exenciones se apoyan y se hacen más visibles en el extranjero mediante reformas de las instituciones y procedimientos administrativos relacionados con el comercio y la inversión productiva. Esta es la segunda palanca que se ha movilizado con bastante fuerza. En esta área de los servicios, la acción pública se centra en los servicios para promover la inversión productiva, y menos en la formación o la asistencia técnica.

En relación con la mejora del "entorno de negocios", el campo de la regulación de la tenencia de la tierra está experimentando cambios cuyos resultados pueden determinar de manera duradera la agricultura en África Occidental. Los Estados ciertamente no han renunciado a la naturaleza nacional del dominio de la tierra. Por otra parte, se han

intensificado las reformas administrativas y las prácticas de arrendamiento a largo plazo mediante acuerdos legales para facilitar el acceso a la tierra a los inversores, incluidos los extranjeros. En comparación, se omite la regulación en las áreas socio ambientales.

Por último, las inversiones públicas en la provisión de bienes e infraestructuras también son importantes. Con la intención de tener un efecto de multiplicación, se centran en las instalaciones hidroagrícolas. Dedicado principalmente al sector del arroz, el financiamiento también incluye un componente de procesamiento (particularmente en Costa de Marfil). Se realizan mediante un amplio recurso a préstamos de organismos financiadores (BAD y BM, de 70 a 120 millones de euros).

En la etapa de llegada de las inversiones y de concentración de las actividades, la acción pública tiene dificultades para posicionarse frente a los actores privados. En esta etapa del modelo inicial, muy liberal, se prevén pocas medidas estatales, en las que la agroindustria desempeña un papel central. El trabajo de tesis documenta, a través de tres casos específicos, las trayectorias de desarrollo de estos actores heterogéneos y el posicionamiento del Estado hacia ellos. La observación establecida es que la frontera a veces se difumina entre los papeles respectivos de la acción pública y los actores privados.

Los Estados a veces adoptan posiciones ambivalentes. En el sector de la tierra, las políticas fomentan las negociaciones directas entre pequeños propietarios e inversores (nacionales o extranjeros). El Estado, sin acompañar las interacciones entre actores en un equilibrio de poder muy asimétrico, sigue siendo, sin embargo, un intermediario legal para los contratos de alquiler a largo plazo (modelo de subarrendamiento). Esta situación ha contribuido a altas tensiones, incluso a acaparamiento de tierras y a violaciones de los derechos humanos. A través de los casos documentados, es manifiesto que las relaciones de poder entre los

actores económicos y los gobiernos son determinantes fuertes de la acción pública en esta etapa.

En cuanto a las relaciones entre los actores del agronegocio y los pequeños productores nacionales, se contemplan en las dos últimas etapas, en las que se movilizan pocas palancas de acción pública. Entre ellas, los subsidios a los insumos agrícolas se distribuyen entre los productores de manera muy desigual. El deseo de reforma (Senegal) y una mejor atención a los agricultores familiares (Burkina Faso) podría dar lugar a un cambio en la acción pública, que debería documentarse. En el ámbito de la estabilización, no cabe duda de que el Estado está movilizándose cada vez más al sector privado, en particular para la cobertura de los riesgos agrícolas a través de las APP de seguros. Aunque existen matices nacionales, el apoyo a las relaciones contractuales es generalmente débil, tanto para la producción como para las transferencias de ingresos entre la agroindustria y los pequeños productores.

En segundo lugar, es relevante presentar los resultados del estudio de las trayectorias de los agronegocios en cada uno de los tres polos de crecimiento, a fin de extraer conclusiones sobre el posicionamiento del Estado. Estas "fotografías" de las trayectorias de los actores privados -o de una iniciativa piloto para movilizarlos, en el caso de Senegal- no pretenden ser exhaustivas ni generalizadas. Sin embargo, proporcionan una oportunidad para profundizar el conocimiento y plantear vías de reflexión sobre ciertos temas que no pueden ser ignorados en el estudio de las políticas públicas específicas de los agropolos. El informe elaborado para estos tres proyectos es bastante decepcionante en relación con los objetivos fijados inicialmente y permite realizar un análisis crítico del modelo. Las razones de estas deficiencias son diversas.

En Bagrépôle (Burkina Faso), el balance de las entradas de capital privado y el desarrollo de las actividades productivas sigue siendo muy desigual. Los planes de la empresa

conjunta creada para la ejecución del proyecto preveían que hasta el 64% de la zona irrigada estaría ocupado por proyectos de agronegocios. Se han preparado cartas de intención por valor de 55 millones de euros por parte de 19 empresas -incluidas 10 empresas nacionales del sector de los cereales, las semillas oleaginosas y la transformación- y se han identificado en la plataforma Grow Africa. Sin embargo, la afluencia de inversiones y su realización en la actividad productiva distan mucho de ser evidentes.

Muchas de las empresas y explotaciones agrícolas creadas no han podido mantenerse. Las razones de esta corta vida útil se atribuyen a la demora en el establecimiento de la infraestructura de riego primario o a planes empresariales deficientes, que no permiten llevar a cabo planes de riego complementarios ni superar las limitaciones climáticas y de acceso a los mercados. El retraso y el cumplimiento de los compromisos mutuos son fuentes de tensión entre las empresas privadas y los Estados. Así lo demuestra la trayectoria del grupo Velegda, empresa burkinesa a la que se le han adjudicado parcelas de cultivo de regadío en Bagrépôle, con el objetivo final de cultivar 600 ha de arroz y maíz con alta mecanización, y de establecer una planta de descascarillado de arroz. Hasta la fecha, el desarrollo de la infraestructura principal de Bagrépôle aún no ha concluido, lo que bloquea el desarrollo de la infraestructura secundaria de Velegda. Según la información recogida sobre el terreno, Velegda alquiló las 500 hectáreas de tierra asignadas en 2015 a varios otros agricultores que están desarrollando cultivos distintos del arroz, sin que se llevara a cabo ningún tipo de desarrollo hidroagrícola.

La ocurrencia de bloqueos materiales, logísticos o de comunicación entre actores con ritmos y lógicas diferentes es un factor determinante en las políticas estudiadas. Entre las parcelas que eventualmente van a ser explotadas por operadores privados, las que han sido irrigadas hasta la fecha son cultivadas casi principalmente por los agricultores de pequeñas

áreas. Por lo tanto, es importante señalar que los estudios en curso, que se centran en los efectos de estas áreas irrigadas en las condiciones de vida de los pequeños productores familiares, muestran que no han visto disminuir su nivel de vulnerabilidad a la inseguridad económica y alimentaria como resultado de la inversión pública (Tapsoba, 2018).

En Costa de Marfil, el enfoque sectorial, más difundido en todo el país pero no menos ambicioso, se enfrenta a dificultades no tanto por la afluencia de socios privados sino por su permanencia.

La Estrategia Nacional de Desarrollo del Sector del Arroz (SNDR, 2012-2020) prevé ampliar la infraestructura hidroagrícola hasta que se invierta la proporción entre la producción de arroz de regadío y de secano a partir de 2020. Incluye una organización territorial del desarrollo agrícola en la que los actores privados tienen un papel central (más del 60% de la financiación del plan). Además de la producción, la transformación es un componente clave de la SNDR, de la cual el 64% se basa en las contribuciones del sector privado. Los proyectos de construcción de plantas procesadoras son ambiciosos: se construirán unas treinta unidades grandes y cien pequeñas. Sin embargo, varias zonas gris deben ser destacadas en este panorama.

Por un lado, la contribución pública se realiza a través de un préstamo indio de Team 9 (Grupo de Reflexión del Enfoque Técnico y Económico para el Movimiento África-India, que desde 2008 ha permitido a 8 países africanos beneficiarse de líneas de crédito indias), que es similar a la ayuda condicionada. La licitación para parte de las obras fue ganada en 2014 por la empresa india Lucky Exports, que al mismo tiempo se encuentra ante el Tribunal Supremo senegalés, acusada por un competidor (también indio, Angélique Ltd) de haber obtenido un contrato de electrificación rural por acuerdo directo.

Por otro lado, el progreso en la construcción de estas unidades parece estar por debajo del 10%, muy por debajo de los objetivos y declaraciones optimistas del gobierno. Las causas identificadas son dobles: dificultades técnicas internas de las empresas -incluido el uso indebido de los anticipos desembolsados por el Estado para superar problemas internos y no para llevar a cabo el trabajo- y dificultades de desembolso por parte del Estado.

Por último, en el polo de Bélier, la planta arrocerá de Yamoussoukro está bien terminada, pero su explotación por un operador privado duró menos de cinco años. En 2013, se firmó una APP entre el distrito de Yamoussoukro y el grupo Novel S.A. (una sucursal del grupo Interval Genève S.A., con sede en Suiza, que fue apoyada por las recomendaciones del PNUD y del Banco Africano de Desarrollo). Sin embargo, esta última se retiró en 2017, y hasta la fecha no se conoce ningún otro operador interesado. La APP funcionaba de la siguiente manera: los productores contratados y sus cooperativas recibían crédito para semillas, insumos y equipo de producción, mientras que la producción debía transferirse a Yaanovel para su procesamiento (Chiapo, 2016:27). Las actividades de Yaanovel tenían por objeto ofrecer oportunidades a los productores no contratados, en función de las necesidades de los arrozales (ibíd.: 20).

Sin embargo, se han documentado problemas en el cumplimiento de los compromisos de los agronegocios (Chiapo et al., 2017). La producción de semillas de Yaanovel no se realizó en asociación con la Asociación Nacional de Semillas de Costa de Marfil, excluyendo a la industria local de semillas. En general, los efectos en términos de creación de empleo han estado muy por debajo de las metas, menos de 50 (ibíd.: 30). El riesgo compartido se considera muy desventajoso para los productores. Se ven obligados a endeudarse como consecuencia de los retrasos de Yaanovel tanto en el suministro de insumos como en el pago de las cosechas (más de 3 meses). Según la evaluación realizada para INADES

Formaciones, la relación asimétrica de poder dejó a los productores sin recurso a la contestación, con poco apoyo de las autoridades públicas (ibíd.: 29). Por último, el operador se retiró tras el bloqueo de las negociaciones, en parte debido a un desacuerdo sobre las subvenciones para instalaciones hidroagrícolas.

El caso de Yaanovel destaca que la existencia de vínculos contractuales no es suficiente para el desarrollo del sector de manera inclusiva y sostenible: las condiciones en las que circulan los flujos de producción e ingresos entre la agroindustria y los pequeños productores, así como la distribución del riesgo entre estos actores, son elementos clave. Finalmente, el caso Yaanovel nos invita a contemplar los riesgos de tal concentración del sector en términos de relaciones de poder y sostenibilidad en el tiempo.

En Senegal, los datos disponibles sobre la evaluación general del desarrollo de los agronegocios sugieren experiencias más positivas. Entre 2000 y 2015, las áreas irrigadas se ampliaron en 25.500 hectáreas, incluyendo 11.000 hectáreas (10% del área total) desarrolladas por agroindustrias senegalesas y extranjeras. El impacto en términos de empleo se estima en más de diez mil, en su mayoría de forma temporal.

Por lo tanto, la cuestión de la disponibilidad de tierras y recursos para seguir el ritmo de este desarrollo acelerado de los cultivos agroindustriales es crucial. El Polo de Crecimiento Agrícola del Valle del Río Senegal, que representa un ejemplo comparativamente más avanzado de desarrollo de la agroindustria, es un laboratorio de experimentación de políticas. Grandes áreas del territorio están afectadas por la intensificación agrícola, que tiene lugar a través del desarrollo hidroagrícola, pero también en las áreas que han sido designadas por un proyecto reciente, el proyecto para el desarrollo inclusivo y sostenible de los agronegocios en Senegal (PDIDAS). Esta última se encuentra en la intersección de cuestiones relacionadas con las relaciones entre los actores rurales y la cuestión de la tierra.

Las modalidades de aplicación de un modelo complejo de régimen de tenencia de la tierra en alquiler cuestionan las relaciones de poder entre los actores. En este proyecto de desarrollo establecido a través de un préstamo del BM, las negociaciones deben tener lugar directamente entre los inversores (o agronegocios) y los agricultores familiares, y luego ser formalizadas por las autoridades municipales. A pesar de los objetivos a la “inclusión,” y de los órganos de consulta que prevé el proyecto a nivel local, se han documentado abusos evidentes en el terreno. En ausencia de un registro de la propiedad y de un mercado inmobiliario a nivel comunal, algunas oficinas de catastro (físicamente) establecidas se enfrentan a graves problemas en la formación del personal o a conflictos de intereses, y pueden parecer cáscaras vacías. En este contexto, las empresas parecen ser reticentes a posicionarse sobre las "ofertas" que constituyen estas áreas. Esta situación plantea interrogantes sobre la distribución de los fondos públicos ya desembolsados en el desarrollo hidroagrícola, en nombre del efecto "palanca". Frente a este bloqueo -de los cuales los elementos aquí analizados no son necesariamente los únicos factores- los fondos del proyecto están actualmente en suspenso.

Las implicaciones de la experiencia del PDIDAS podrían ser fuertes determinantes de las políticas públicas agrícolas. Las tensiones en la tenencia de la tierra y la competencia por los recursos en torno a los proyectos agroindustriales documentados en Senegal revelan los desafíos que rodean la próxima reforma del marco de regulación de la tierra, coordinada desde 2012 por una Comisión Nacional de Reforma Agraria. La cuestión de la tierra es, sin duda, un obstáculo que pone en tela de juicio la capacidad de las políticas públicas para preservar y equilibrar los intereses de los distintos actores del mundo rural: los pequeños agricultores familiares, los pastores y, en particular, las empresas agrícolas en desarrollo.

Conclusión y discusión

Al final de esta presentación de los resultados, las principales conclusiones del estudio permitieron validar la hipótesis de investigación. La acción pública moviliza principalmente exoneraciones fiscales para los agronegocios, invocando su eficacia y neutralidad sobre las finanzas públicas. Las grandes infraestructuras, especialmente las hidroagrícolas para el sector del arroz, se financian mediante préstamos de varias decenas de millones de euros. Estas modalidades pueden plantear interrogantes sobre los efectos de las políticas en la deuda y los impuestos a largo plazo. Aunque los proyectos se presentan como financiados por bancos de desarrollo, son importantes préstamos a largo plazo, especialmente en Costa de Marfil y Senegal, donde el Estado proporciona más del 80% de la financiación para proyectos de polos de crecimiento.

Por otro lado, como lo ilustran claramente las trayectorias de los actores privados en cada país, estos resultados plantean varios puntos de discusión, propuestos en el último capítulo de la tesis como ejes de extensión de la agenda de investigación. En las experiencias documentadas, algunas políticas públicas se enfrentan a importantes problemas de operacionalización, mientras que las medidas que se han puesto en práctica sólo tienen un impacto limitado en términos de flujos de capital privado. Estos límites de impacto son tanto más notables cuanto que las políticas se centran principalmente en el atraer a estos agronegocios. Los Estados estudiados no aplican realmente una política para la agricultura familiar, a la que pocas medidas son realmente accesibles. El deseo declarado de generar un crecimiento inclusivo a través de este modelo de agropolos debe realizarse a través de efectos indirectos, vinculados en particular a la agricultura por contrato. Sin embargo, las políticas plantean dichos efectos por una definición poco precisa, incluso "simplista"

(Gabas et al., 2018). Los casos estudiados muestran que estos efectos virtuosos están lejos de ser evidentes.

Este estudio pone de manifiesto que la acción pública se reduce principalmente a facilitar el entorno empresarial. Abre una reflexión sobre el papel del Estado en el apoyo al desarrollo agrícola. ¿Cuáles son los factores determinantes de tal elección? ¿Cuál es el papel respectivo de las restricciones presupuestarias y de la circulación de modelos de desarrollo por parte de las instituciones internacionales? El capítulo final de la tesis explora las respuestas a estas preguntas, posicionándose a escala internacional. Los estudios sobre las relaciones de poder político e institucional en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial han demostrado el predominio del paradigma productivista (Fouilleux et al., 2017). Los resultados de los estudios de caso de este trabajo permiten analizar el modelo de agropolos no como un instrumento neutro, sino como una estrategia altamente normativa, adoptada para proporcionar una solución primordialmente productivista a la crisis de precios de 2008. Para afinar este análisis, los agropolos podrían estudiarse utilizando el enfoque de los estudios de transferencia de políticas (*policy transfer studies*), que estudia la circulación internacional de soluciones de políticas (véase Delpuech, 2006). La rama de la sociología de la acción permite centrarse en particular en los procesos de difusión de las soluciones de acción pública formuladas.

Desde esta perspectiva, la socio-antropología de la acción pública de desarrollo (Fresia et al., 2018) sugiere que las relaciones entre los actores nacionales e internacionales son asimétricas, pero no unidireccionales. Las estrategias y el margen de negociación de los actores (Whitfield et al., 2008) pueden entenderse teniendo en cuenta la heterogeneidad de los puntos de vista dentro de ellos. Por ejemplo, no hay una visión senegalesa del modelo de agropolos, sino una negociación entre las visiones de individuos o grupos. El caso de

PDIDAS ha demostrado que estas visiones pueden ser antagónicas: ¿cuáles son entonces las interacciones y estrategias de los diferentes grupos de presión internacionales, estatales y de la sociedad civil en la adopción del modelo de agropolos? Sin embargo, el estudio realizado nos invita a ir más allá del marco privilegiado del trabajo existente, que postula que siempre hay divergencia y compromiso entre donantes (o inversores) y países beneficiarios. Una economía política de políticas de crecimiento agrícola nos invitaría a cuestionar la relación de las élites africanas con la "emergencia", y sus intereses en un enfoque basado en el crecimiento de la producción intensiva.

Estas líneas de investigación parecen importantes para comprender las dinámicas en marcha en los numerosos países en los que se están llevando a cabo proyectos de polos de crecimiento agrícola, incluso más allá del continente africano. Si bien este modelo tiene por objeto aumentar las actividades agroindustriales y permitir el "crecimiento agrícola", también determina, mucho más allá, trayectorias de desarrollo que estructuran el mundo rural y las vidas de sus actores.

Bibliografía indicativa

- Dagor, J.-C., Jamart, C., Jorand, M., Pascal, P. (2016). *Agriculture africaine: l'impasse des pôles de croissance agricoles*. Action Contre la Faim, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam.
- Daviron, B., Faivre Dupaigne, R., Ribier, V., Rolland, J. P., Voituriez, T., & Fallot, A. (2004). *Manuel d'élaboration des politiques agricoles: construction d'argumentaires pour l'intervention publique en Afrique de l'Ouest et du Centre*. GRET.
- Delpeuch T. (2006). « Comprendre la circulation internationale des solutions d'action publique : panorama des policy transfer studies ». *Critique Internationale*, Presses de Sciences Po, 2009/2, no43, pp 153-165.
- Fouilleux, E., Bricas, N., & Alpha, A. (2017). 'Feeding 9 billion people': global food security debates and the productionist trap. *Journal of European Public Policy*.

- Fresia, M., Lavigne Delville, P., & Moatti, J. P. (2018). *Au coeur des mondes de l'aide internationale: regards et postures ethnographiques*. Karthala
- Gabas, Ribier et al. 2015 *Etude sur le financement du développement agricole en Afrique de l'ouest Synthèse tirée de l'analyse comparative des études de cas : Costa de Marfil, Ghana, Sénégal*. Montpellier : CIRAD-ES, 24 p.
- Lynn, S., & Hathie, I. (2016). Développement Rural et Sécurité Alimentaire- *Analyse d'économie Politique (PEA) des Filières de l'Arachide et du Riz au Sénégal*. Rapport final
- Ouattara, N., 2016. *Les pôles de croissance agricole: la panacée aux maux de l'agriculture africaine?* Bulletin de synthèse souveraineté alimentaire No. 24. Inter-réseaux, Ouagadougou.
- Picard, F., Coulibaly, M., & Smaller, C. (2017). *The Rise of Agricultural Growth Poles in Africa*. Note de synthèse 6. International Institute for Sustainable Development.
- Soullier, G. (2018) *RICE Flagship Project 2: Learnings so far and priorities for the next three year*. Présenté aux MELIAG workshop, Sept 3-6, 2018, Bangkok Thaïlande
- Speakman, J., Koivisto, M., 2013. *Growth poles: raising competitiveness and deepening regional integration, in: The Africa Competitiveness Report*. World Economic Forum, Geneva, p. 221.
- Tapsoba, A. et al., (2018) « Grands périmètres irrigués et résilience des paysans au Sahel. Le cas de Bagré au Burkina Faso », *Revue internationale des études du développement* 2018/3 - 235), p. 147-176.
- Whitfield, L. (Ed.). (2008). *The politics of aid: African strategies for dealing with donors*. OUP Oxford.